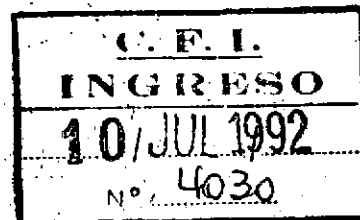


36340

Buenos Aires, 10 de julio de 1992.

Sr.
Secretario General del
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Ing. D. Juan José Ciacera
Su Despacho



Asunto: INFORME FINAL. Proyecto de reforma del
Código Tributario de la Provincia de
San Juan.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Secretario General con el objeto de hacerle llegar el INFORME FINAL respecto del anteproyecto de reforma del Código Tributario de la Provincia de San Juan.

Viajé a la Provincia de San Juan en tres ocasiones. En la primera de ellas (2 al 4 de marzo del corriente año) tomé contacto con las autoridades fiscales de la Provincia a fin de interiorizarme de las necesidades y requerimientos de las mismas. Como resultado de esa encuesta redacté el primer borrador de un anteproyecto de reforma del Libro Primero del Código Tributario (entregado a ese Consejo el 30-3-92).

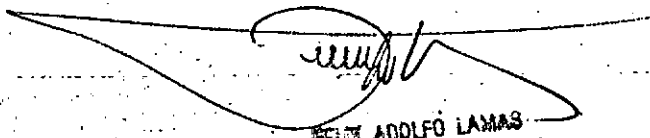
En la segunda oportunidad (31 de marzo al 2 de abril) discutí con las autoridades fiscales provinciales el aludido anteproyecto. Dichas reuniones se continuaron luego en Buenos Aires, los días 4 y 6 de abril. Como resultado de las mismas elaboré un anteproyecto definitivo de reforma del Código Tributario de la Provincia de San Juan, integrado por un Título Preliminar, Libro Primero y anteproyecto de ley de reforma, que incluía las modificaciones propuestas al Libro Segundo. El aludido anteproyecto definitivo fue entregado a ese Consejo con fecha 8-5-92.

El tercer viaje se concretó los días 18 al 20 de mayo. En esa oportunidad, además de reunirme nuevamente con las autoridades fiscales, hice una presentación del Código ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Legislatura local. A pedido de los legisladores y de las autoridades fiscales, redacté los "FUNDAMENTOS DEL ANTEPROYECTO DE CODIGO TRIBUTARIO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN", documento que en este acto acompaño en original y dos copias, y que forma parte del presente.

Queda pendiente la continuación del debate parlamentario, asunto cuya oportunidad es materia política sujeta a la decisión de las autoridades provinciales. Con espíritu de colaboración, y aunque haya ya finalizado el tiempo de mi contrato, me comprometo a viajar a la Provincia de San Juan, a requerimiento de sus autoridades, para asesorar a las mismas en la discusión

parlamentaria.

Aprovecho para saludar al Señor Secretario General con mi
consideración más distinguida.



FELIX ADOLFO LAMAS
ABOGADO
T. 19-F. 349
MAT. C.A.J.R.

O/N 23211
211
III

**FUNDAMENTOS DEL ANTEPROYECTO DE
CODIGO TRIBUTARIO
DE LA PROVINCIA DE LA SAN JUAN**

El Código Tributario vigente en la Provincia de San Juan ha sufrido sucesivas modificaciones que han alterado su organicidad y que, a la vez, no han impedido su progresiva desactualización respecto de la evolución que ha tenido el Derecho Tributario en la República Argentina.

La perentoriedad de su reforma se torna más evidente cuando se percibe la necesidad de hacer más congruentes entre sí las legislaciones tributarias de las diversas jurisdicciones que integran la República, en un tiempo que, como el presente, se caracteriza por la tendencia a la integración internacional regional.

Por otra parte, el dinamismo de la actividad fiscal en el orden nacional exige una coordinación con las jurisdicciones provinciales en temas tales como fiscalización, armonización de los hechos generadores -el Convenio Multilateral respecto del Impuesto a los Ingresos Brutos es un ejemplo-, ilícitos tributarios, etc.

El presente proyecto pretende sumarse a la iniciativa del Consejo Federal de Inversiones de promover un proceso paulatino de unificación de la legislación tributaria, análogo al que se verificara en la década de los años sesenta, y cuyo fruto fuera la mayoría de los códigos provinciales vigentes, en su momento congruentes con los principios que inspiraban a la legislación nacional.

I.- LA ESPECIFICIDAD DE LA MATERIA JURIDICO-TRIBUTARIA

El Derecho Tributario tiene como objeto material principal la obligación jurídico-tributaria, la cual se divide a su vez en impuestos, tasas y contribuciones. La especificidad de dicha obligación resulta de sus elementos constitutivos: sujetos (activo y pasivo), causa-fuente o hecho generador, la relación obligacional misma y su causa-fin.

Anteproyecto de reforma del Código Tributario

El sujeto activo es el Estado en cuanto "fisco", es decir, en cuanto sujeto financiero de Derecho Público dotado del poder de imposición, que es un aspecto específico del poder de imperio.

El sujeto pasivo es el contribuyente -de Derecho y de hecho- y el responsable por deuda ajena; ambas categorías de responsables no están constituidas exclusivamente por particulares sino también por el mismo Estado. La aptitud que habilita a un sujeto en su calidad de contribuyente es, fundamentalmente, la capacidad contributiva.

La causa-fuente formal es la ley -a esto se reduce el principio de legalidad- y su causa-fuente material o hecho generador es, en el impuesto, el hecho imponible; éste consiste en un acto, hecho o situación manifestativo de riqueza y que se verifica en cabeza del contribuyente de Derecho. Respecto de la tasa, el hecho generador es un servicio público indivisible; respecto de las contribuciones, un beneficio diferencial.

La estructura de la relación obligacional misma es específicamente diferente de toda otra relación u obligación jurídica. Se trata de un vínculo imperativo de Derecho Público Financiero en la cual su objeto propio -la prestación tributaria- está determinada por ley en función de dos relaciones: la necesidad de recursos públicos (del sujeto activo) y la capacidad contributiva (del sujeto pasivo). La índole pública de este vínculo obligacional conlleva propiedades tales como la solidaridad pasiva, la existencia de obligaciones accesorias (intereses) y secundarias (deberes relativos a la fiscalización y pagos a cuenta), y consecuencias especiales en caso de incumplimiento (contravenciones fiscales). Los medios de extinción de esta obligación son también específicos; repárese, v.gr., en la prescripción y las normas especiales que requiere, en la compensación de deudas fiscales, en el blanqueo como novación, etc.

La causa-fin es primariamente financiera -solventar los gastos del Estado- y, secundariamente, económica.

Como se ve, la relación jurídico-tributaria es específicamente distinta de las obligaciones del Derecho Privado. Y a su vez es irreductible a otros fenómenos jurídicos del Derecho Público. La determinación de la obligación tributaria, por ejemplo, si bien "ex genere" proviene de la ley, en concreto procede de la propia actividad del contribuyente o responsable en el régimen de autodeterminación por declaración jurada, y sólo subsidiariamente del Sujeto Activo; en los casos de liquidación administrativa, aunque la

Anteproyecto de reforma del Código Tributario

determinación tenga origen en el fisco, el contribuyente puede discutirla, porque al fin de cuentas el monto de la obligación fiscal se determina en función de la materia imponible, y ésta a su vez en función del acto, hecho o situación del contribuyente manifestativo de riqueza y tipificado legalmente como hecho imponible.

En el Derecho Tributario no se verifica, por lo tanto, la discrecionalidad que suele ser característica de los actos de administración activa, y por esa razón, aunque contenga normas administrativas no puede reducirse al Derecho Administrativo. Incluye, además, normas procesales y penales. Pero todas dichas normas están articuladas en torno de aquellas que tipifican los elementos esenciales de la obligación tributaria. En este orden de ideas la doctrina habla mayoritariamente de "autonomía" del Derecho Tributario, expresión que si bien es teóricamente discutible, expresa gráficamente el concepto de especificidad material hasta aquí explicado.

Por último debe advertirse que el Derecho Tributario integra la esfera de soberanía no delegada por la Provincia a la Nación, y que su núcleo está constituido por normas obligacionales sustantivas y no meramente procesales.

II.- CARACTERISTICAS GENERALES DE UN CODIGO TRIBUTARIO

La necesidad de un Código Tributario deriva directamente de la especificidad de la relación jurídico-tributaria y del plexo jurídico, normativo y obligacional que le es anejo.

En efecto, dicha especialidad material reclama principios propios, que la generalidad de las constituciones políticas tienden a reconocer. La tradición jurídica occidental, a partir de la Escuela Española del Derecho -dentro de la que cabe mencionar en especial a Francisco Suárez y su obra "De Legibus ac Deo Legislatore"- y Adam Smith, entre otros, ha elaborado principios de la tributación que se resumen en los principios de legalidad, proporcionalidad, generalidad y equidad.

Bajo la tutela de dichos principios debe configurarse normativamente la estructura de la obligación jurídico-tributaria y de las instituciones conexas: obligaciones accesorias y secundarias, tipos contravencionales y normas procesales, aplicables con carácter general a todos y cada uno de los tributos, con las adaptaciones que en cada uno de ellos impone el hecho generador típico, sus sistemas de recaudación, las peculiaridades de su fiscalización, etc.

Anteproyecto de reforma del Código Tributario

A un código tributario compete, pues, la regulación general y sistemática de la materia tributaria. Ahora bien, todo régimen tributario está compuesto por dos grupos de normas claramente diferenciables:

a) Los principios y normas generales que regulan la obligación jurídico-tributaria y los institutos anejos: la sistematización de tales principios y reglas, los tipos contravencionales y las normas que organizan y regulan la jurisdicción fiscal.

b) El conjunto de las leyes tributarias o fiscales especiales que establecen en particular cada especie de tributo.

Según un criterio técnico de codificación, que tiende a imponerse en la legislación contemporánea, sólo el primer grupo de normas debería constituir el contenido de un código tributario. La razón es que dichas normas -por su propia índole rectora del sistema- requieren de una marcada estabilidad. Las del segundo grupo, en cambio, están sujetas a modificaciones más o menos periódicas, por su inmediata vinculación con las circunstancias económicas y financieras del Estado. Este criterio es el que se ha seguido en el orden nacional mediante la Ley N° 11.683 aunque, lamentablemente, el mismo no ha impedido que dicho cuerpo legal haya sufrido cambios, cada vez más frecuentes, que han llegado a amenazar su coherencia interna.

Otro criterio, en cambio, usado por la generalidad de las codificaciones tributarias provinciales, incluido el Código vigente, ha optado por distribuir la materia tributaria en tres grupos: 1°) las normas generales, que constituyen el Libro Primero del Código; 2°) las normas que especifican el hecho y la materia imponibles, exenciones, sujetos, y demás elementos configuradores de cada tributo, que constituyen el Libro Segundo; y 3°) las normas que fijan las alicuotas, tasas o tarifas de cada tributo, que están agrupadas en una ley anual.

Se ha optado por mantener este último criterio.

III.- LAS FUENTES DEL PROYECTO

Se han utilizado como fuentes principales la Ley N° 11.683, en sus diversos textos históricos, el "Modelo de Código Tributario Latinoamericano" de la OEA-BID, de 1967, los códigos provinciales, y secundariamente se han tenido a la vista otras

Anteproyecto de reforma del Código Tributario

codificaciones hispanoamericanas -v.gr. el Código Tributario de Méjico, el reciente Código Tributario de Costa Rica- y de otros países (la legislación federal norteamericana, la española, etc.).

Sin perjuicio de lo anterior, han constituido para el redactor del anteproyecto fuentes y modelos inmediatos sus propios trabajos de condificación anteriores, a saber:

1°) El anteproyecto de "CODIGO TRIBUTARIO DE LA REPUBLICA ARGENTINA", elaborado para la Fundación Sudamericana en el año 1989.

2°) El anteproyecto de "CODIGO TRIBUTARIO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS", elaborado mediante convenio con el CIAT, el BID y el gobierno de Honduras, en el año 1991.

3°) Y, sobre todo, el anteproyecto de "CODIGO TRIBUTARIO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN", elaborado mediante contrato con el Consejo Federal de Inversiones en el año 1991.

IV.- LA ORGANIZACION DE LA JURISDICCION TRIBUTARIA PROPUESTA

La jurisdicción en general -al menos según su significación etimológica obvia ("juris-dictio")- es el poder jurídico de decir o determinar qué es Derecho en una situación dada. También suele decirse que es la facultad de aplicar la ley en un caso concreto. En el primer sentido, la jurisdicción es una atribución típica de los jueces. En el segundo sentido, también el Poder Administrador tiene funciones jurisdiccionales.

Si se admite la especificidad de la obligación tributaria, de sus obligaciones accesorias y secundarias, de los ilícitos contravencionales respectivos y de sus consecuencias, resulta conceptualmente innegable que debe haber una jurisdicción tributaria acorde con dicha especificidad. Un acto jurisdiccional consistente en determinar la materia imponible, un acto que resuelve una reclamo de repetición tributaria, o un acto que aplica una sanción fiscal contravencional, son actos que se diferencian específicamente de cualesquiera otros actos de la Administración. Las diferencias son muchas e importantes: la Administración carece de discrecionalidad, el acto se integra con una previa actividad económica del contribuyente o responsable, a quien se le atribuye la actividad originaria y generativa de la relación obligacional (el hecho generador), en

Anteproyecto de reforma del Código Tributario

el sistema de autodeterminación del gravamen, incluso, la determinación original es propia del contribuyente y responsable y, sólo subsidiaria o correctivamente del fisco, etc.

Dentro de las múltiples variantes que existen o pueden existir de organización de la jurisdicción tributaria, pueden señalarse tres modelos típicos:

a) Jurisdicción administrativa en sede de la Administración activa (con las vías recursivas pertinentes), con salida contencioso-administrativa judicial. Este es el régimen vigente en la Provincia de San Juan.

b) Jurisdicción administrativa, con una instancia contencioso-administrativa ante un tribunal especial, separado de la Administración activa, pero sujeto jurisdiccionalmente al poder administrador, con salida - por vía de apelación- ante los tribunales judiciales.

c) Jurisdicción judicial específica (precedida de una breve instancia administrativa).

El primer modelo típico presenta muchas y graves dificultades funcionales, de economía fiscal, e incluso de indole constitucional. Desde un punto de vista funcional, la experiencia parece indicar que la existencia de múltiples instancias administrativas implica grandes demoras, a la vez que un desgaste y desviación de fuerzas administrativas en desmedro de las funciones específicas de recaudación y fiscalización de tributos. Esto tiene consecuencias, a su vez, en la economía de la administración tributaria, pues el desvío de fuerzas administrativas internas quita eficacia a las restantes funciones específicas, encarece la administración tributaria y, en caso de discusión, demora la percepción de los gravámenes. Desde el punto de vista jurídico-constitucional, es evidente que la identificación de juez y parte, en la instancia administrativa, resta posibilidades de defensa al contribuyente y responsable; y, en los hechos, quien suele preparar y fundar el acto del superior es el propio inferior recurrido; pero, sobre todo, debe tenerse presente que el Pacto de San José de Costa Rica, mediante su art. 8º, ha establecido que toda persona tiene derecho, con carácter previo a la reclamación coactiva de una obligación tributaria, a ser oído por un tribunal competente, imparcial e independiente del poder administrador. Esto quiere decir que a las demoras que conlleva la discusión administrativa, cabe agregar con carácter previo al pago de un impuesto cuestionado el trámite de un proceso judicial. Y si se pretendiere aplicar el principio "solve et

Anteproyecto de reforma del Código Tributario

repete", se chocaría con el orden constitucional de prelación de normas.

El tercer modelo típico (jurisdicción judicial) podría ser considerado teóricamente el mejor y el más adaptado a la división constitucional de poderes y funciones. Pero tiene dos desventajas importantes: en primer lugar, supone un tránsito brusco a un sistema que no tiene antecedentes en la legislación argentina; en segundo lugar, implica la necesidad de implementar un fuero judicial especial, que incrementaría en términos significativos el presupuesto provincial.

El segundo modelo típico, que es el que se instrumenta en el proyecto, tiene como ventajas las siguientes: 1°) permite mantener el principio "solve et repete" sin agravio constitucional alguno; 2°) agiliza la administración fiscal; 3°) crea un órgano de control de la administración tributaria activa, altamente especializado, y con poderes suficientes como para asegurar la consecución de la verdad objetiva; 4°) tiene antecedentes de aplicación satisfactoria en el orden nacional y en las provincias más importantes (Buenos Aires y Córdoba); 5°) es la solución que tiende a generalizarse en el Derecho Tributario comparado, al menos en Hispanoamérica.

V.- EL CONTENIDO ESQUEMATICO DEL PRESENTE PROYECTO

Se ha introducido un Título Preliminar, que consta de dos capítulos. El primero está dedicado a precisar el ámbito material y jurisdiccional de aplicación del Código; se extiende el ámbito de aplicación a hechos, actos o situaciones realizados fuera del territorio provincial, siempre que tengan efecto económico en éste o en el patrimonio de sus habitantes (se sigue en esto el modelo de las leyes de impuesto de sellos); además, se prevé la existencia de ámbitos y oficinas sujetos a jurisdicción provincial que no necesariamente deben estar en el territorio provincial; el caso típico está constituido por las delegaciones provinciales en la Capital Federal u otras provincias: sin esta previsión todos los actos administrativos o de fiscalización cumplidos por dichas delegaciones serían nulos; normas congruentes con este principio se prevén para la fiscalización; las normas del código, asimismo, se aplican supletoriamente en materia tributaria municipal, buscando a través de este medio unificar los principios jurídicos que deben regir la tributación dentro del Estado provincial. El Capítulo II, referido a la norma tributaria en general, reglamenta el principio de legalidad; se

Anteproyecto de reforma del Código Tributario

ha seguido en este punto la sistemática del "Modelo de Código Tributario Latinoamericano".

Los primeros cuatro títulos del Libro Primero estructuran en general la obligación jurídico-tributaria.

El Título Primero trata acerca del sujeto activo -el Estado en cuanto "fisco"- concretado en la autoridad de aplicación del Código: la Dirección General de Rentas. En el Capítulo I se le asignan sus funciones generales, se crea la figura del "juez administrativo", siguiendo el modelo de la ley nacional, y se establece el principio de la competencia originaria y exclusiva de esta autoridad de aplicación en su ámbito específico. En el Capítulo II se establecen los poderes y facultades que derivan de la misión y función asignada. En el Capítulo III, y siguiendo una idea del Modelo de Código Tributario Latinoamericano, se fijan asimismo los deberes generales de dicha autoridad, que correlativamente deben ser entendidos como derechos de contribuyentes y demás responsables.

El Título Segundo se refiere al estatuto general del sujeto pasivo. En el Capítulo I se definen genéricamente los contribuyentes de Derecho, según el modelo de la ley nacional. En el Capítulo II, y de acuerdo con la misma fuente, se enumeran los responsables por deuda ajena. En el Capítulo III se regula el instituto jurídico de la solidaridad; si bien se sigue en principio la metodología de la ley nacional, se incorpora -en el artículo 39- una regla de solidaridad objetiva cuya fuente es el artículo 23 del Modelo de Código Latinoamericano. En el Capítulo IV -responsabilidad por hechos u omisiones de gestores y dependientes- se sigue a la ley nacional; lo mismo cabe decir respecto del Capítulo V -domicilio fiscal-. El Capítulo VI -deberes relativos a la verificación y fiscalización de tributos- se inspira en la metodología del citado Modelo de Código, pero incorporando en lo posible, y en forma simplificada, los contenidos de la legislación nacional y de los principales códigos provinciales; la regla del art. 49 pretende poner de manifiesto el carácter universal de las normas referidas a la fiscalización, como un deber o carga jurídica propia de todos los habitantes.

El Título Tercero trata del objeto y determinación del tributo, es decir, del origen y existencia misma de la obligación jurídico-tributaria. Se incluye aquí un capítulo dedicado a las exenciones, para remarcar el hecho de que toda exención presupone la gravabilidad en principio de una materia o actividad determinada y la previa existencia del hecho imponible; y en esto se diferencia, precisamente, de la mera "no sujeción" al tributo, pues mientras en esta última hipótesis el

Anteproyecto de reforma del Código Tributario

acto, hecho o actividad están fuera del ámbito del impuesto, en el caso de la exención hay hecho imponible y sólo de exime, condicionadamente, de la consecuencia: el nacimiento de la obligación de pago del tributo. En el Capítulo I se regula el hecho y la materia imponible. Si bien se ha recogido la doctrina tradicional emergente del principio de "realidad económica", tal como el mismo aparece formulado en los códigos provinciales y en el artículo 12 de la ley nacional, debe advertirse que los artículos 54, 55 y 57 son nuevos. El Capítulo II recoge normas ya tradicionales de la ley nacional y de los códigos provinciales. El Capítulo III -exenciones y otros beneficios fiscales- se inspira en el referido Modelo de Código y pretende evitar abusos y solucionar problemas comunes en la aplicación de estos institutos de excepción.

El Título Cuarto -extinción de la obligación tributaria- incorpora, dentro del cuadro metodológico del aludido Modelo de Código, normas de la legislación nacional y de los códigos provinciales. En especial, se prevé el régimen supletorio de imputaciones de pago (artículo 75). Las normas de prescripción siguen las pautas de la legislación nacional, con algunas correcciones.

El Título Quinto legisla sobre la obligación jurídico-tributaria accesoria más típica: los intereses. El sistema -que excluye la institución de la actualización- se estructura en torno de tres tipos de intereses: resarcitorios, moratorios y punitivos, que corresponden a sendas hipótesis diferentes de falta de pago en término de la obligación. Como característica del régimen, debe apuntarse que se ha procurado establecer la simetría más estricta posible entre los responsables y el fisco, salvo el caso de mora del Estado (en este supuesto, no opera la mora automática sino que es necesaria la reclamación previa; la razón es obvia: el fisco no está en condiciones de aceptar o rechazar un pago, aunque éste sea indebido; la detección de una deuda en favor del contribuyente requiere siempre, en mayor o menor medida, la intervención de éste). El interés resarcitorio -Capítulo I- tiene una función indemnizatoria objetiva del daño consiguiente a la indisponibilidad del capital adeudado en la hipótesis de que no se haya verificado la mora. El interés moratorio -Capítulo II-, en cambio, incluye un incremento del interés anterior, pues se trata de la indemnización correspondiente a un daño producido con culpa del deudor. El interés punitivo, a su vez, pretende castigar a quien, sin fundamentos razonables, haya obligado a poner en marcha el aparato jurisdiccional para la satisfacción de la deuda. Se han tenido a la vista, como fuentes orientadoras, la legislación nacional, el Modelo de Código Latinoamericano y los códigos provinciales, pero el diseño del

Anteproyecto de reforma del Código Tributario

todo el título es original (sus fuentes inmediatas son las indicadas más arriba, en el punto III, último párrafo).

El Título Sexto está dedicado a los pagos a cuenta de los tributos, los cuales constituyen una obligación jurídico-tributaria secundaria. Las tres especies de pagos a cuenta -anticipos, retenciones y percepciones, y pago a cuenta de tributo vencido-, tienen como antecedente el régimen nacional. Sin embargo, se ha procurado hacerlos más congruentes con el principio de capacidad contributiva. Así, se reconoce explícitamente como fundamento de los mismos una presunción de capacidad contributiva que, en el caso de las dos primeras especies, el propio contribuyente puede ajustar a su capacidad real.

El Título Séptimo -que comprende el régimen contravencional tributario- tiene diversas fuentes: la legislación tributaria nacional en sus distintos textos históricos, el Modelo de Código Latinoamericano y la Ley nacional N° 23.771, además de los trabajos y otros anteproyectos del redactor. Los principios en función de los cuales se articula el sistema pueden ser resumidos en los siguientes:

1.- La distinción -de rango sustancial y constitucional- entre delitos y contravenciones.

2.- El carácter sustancial de la materia contravencional tributaria, dentro del marco de soberanía no delegada por las provincias a la Nación.

3.- La vigencia de la Parte General -Libro Primero- del Código Penal.

4.- La culpa como elemento típico de la atribución de responsabilidad penal-contravencional.

5.- La congruencia con la legislación nacional.

El Título Octavo organiza los procedimientos tributarios administrativos. Si bien se han tenido en cuenta como fuentes las normas de la legislación nacional, se han reformulado las mismas, procurando hacerlas más claras y con un mayor rigor sistemático. Así, por ejemplo, se ha incorporado un capítulo con normas generales. La innovación más importante es la relativa a la reglamentación de la fiscalización; se establecen las condiciones de eficacia probatoria de las actas, se amplían las facultades de fiscalización hasta incluir la clausura preventiva en casos determinados, y se confieren al fiscalizado dos importantes derechos: 1°) intervenir activamente en el

Anteproyecto de reforma del Código Tributario

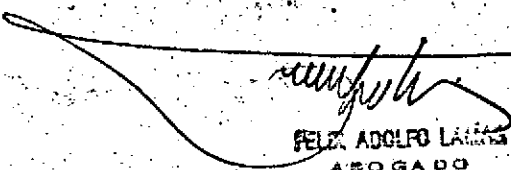
proceso de fiscalización, aportando en el mismo prueba, y 2°) una acción de amparo fiscal frente a los excesos que pudieran verificarse en el procedimiento. Asimismo, se prevé explícitamente en el Capítulo VII- la aplicación en el ámbito provincial de la Ley N° 23.771.

El Título Noveno está dedicado a los procedimientos contencioso-administrativos y judiciales. Su fuente es la legislación nacional y los códigos provinciales que han organizado tribunales fiscales. Se ha procurado simplificar los procedimientos y abreviar los plazos, teniendo en cuenta la posibilidad que tienen los contribuyentes de comenzar el ejercicio de la defensa de sus derechos ya en la etapa de la fiscalización.

VI.- OTRAS REFORMAS Y NORMAS DE TRANSICION

En el anteproyecto de ley de reforma se han incluido modificaciones del Libro Segundo, con el objeto de tornarlo coherente con el Libro Primero, así como otras modificaciones menores sugeridas por las necesidades de la Administración fiscal.

Se han previsto también las normas de transición y vigencia, se invita a los municipios a adherirse al régimen del Título Preliminar y del Libro Primero, y para este supuesto se prevé la creación de una sala especial del Tribunal Fiscal.


FELPE ADOLFO LARREA
ABOGADO
T° 19 - F° 555
MAT. C.S.J.N.